

¿Podría considerarse parte de la política de seguridad pública una
masacre como la ocurrida en Río de Janeiro?

Imprimir

Lo ocurrido en Río el martes 28 de octubre es inaceptable en una democracia digna de ser vivida. Librar una «guerra real» en el territorio común de la ciudadanía es un acto que solo produce muerte y jamás podrá considerarse una política para garantizar el derecho fundamental a la seguridad pública.

¿Qué le pasa por la cabeza al gobernador Castro? Pues bien, para alguien que incluso propuso un pago adicional a los policías para eliminar a los “criminales”, esto revela un desprecio absoluto por el significado mismo de la seguridad pública en una democracia. Queremos derechos garantizados, pero no una política que, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, niega el debido proceso en las sentencias y prefiere la confrontación, lo que termina llevando a lo que ha llevado: muchas personas inocentes asesinadas por vivir en zonas pobres y marginadas, junto a criminales que nunca pueden ser juzgados porque son eliminados. Es más, incluso si fueran encarcelados, nuestra política, que prefiere la confrontación, no garantiza la vida de aquellos considerados criminales, arrestados y juzgados. Parece que al gobierno del estado de Río de Janeiro solo le importa eliminar a los considerados bandidos, sin importarle las muchas personas inocentes que podrían ser asesinadas, simplemente por tener que sobrevivir en territorio de “alto riesgo”. Señor gobernador, ¿adónde pueden ir si no es a soportar la carencia de todo lo que representan las favelas y estos supuestos “complejos”? ¡Ya basta! ¡Juicio político para Castro y otros ocho años de inhabilitación!

La razón principal de una política de seguridad pública es garantizar la igualdad de derechos a todos los ciudadanos. De hecho, criminalizar el consumo de drogas solo puede conducir a situaciones como esta: no solo asesinatos, sino delitos. Basta con ver lo que Trump y el poderoso ejército bajo su mando están haciendo en el Caribe y el Pacífico. ¿Acaso matar gente es aceptable? ¿Por qué no arrestar e investigar? Esto nos afecta directamente, a nuestras ciudades. ¿Cuántas muertes más tenemos que lamentar y sufrir a causa de esta inútil política de “guerra”? ¿Cuánto tiempo más aceptaremos semejante agresión contra el derecho fundamental a la seguridad, tanto individual como colectiva?

Es normal que como ciudadanos discrepemos sobre cuál es la mejor política. Pero,

¿Podría considerarse parte de la política de seguridad pública una
masacre como la ocurrida en Río de Janeiro?

¿buscamos realmente una política de seguridad pública efectiva en todos los niveles de gobierno? Coincido con muchos en que la criminalización de las drogas es un error y la peor manera de combatir un problema de adicción y salud que siempre ha existido y cuyo consumo solo aumenta las muertes y ha demostrado ser ineficaz en todo el mundo. ¿No sería mejor considerar el consumo de drogas como un grave problema de salud en lugar de utilizar un arsenal de represión que solo estimula el narcotráfico y la inversión en armamento, incluyendo armas letales y bombas lanzadas por drones, como se vio el martes en Río de Janeiro? Suiza, un centro financiero mundial e incluso un foco de lavado de dinero por parte del crimen organizado —poco penalizado en este mundo globalizado—, prioriza la salud pública sobre la represión en materia de drogas. ¿Acaso vamos a imitar el lavado de dinero en lugar de los buenos ejemplos de políticas de atención a las drogas en Suiza? Es una contradicción, lo sé, pero vale la pena recordar que las buenas políticas públicas siempre van a la zaga del mercado. De hecho, los narcotraficantes son, ante todo, una cuestión de mercado, de buenos negocios y de su “dictadura”.

Bueno, tenemos que abordar el problema inmediato y encontrar la manera de evitar que se repita mañana: una «guerra interna», tan del gusto de las dictaduras represivas y asesinas. En realidad, no se puede esperar nada del gobierno estatal que tenemos, con la gran complicidad de la propia Asamblea Estatal y un Poder Judicial... que tiene mucho que ver con lo que podría hacer. Al fin y al cabo, lo que está en juego es el marco institucional del Estado de Río.

Lo que agrava aún más la situación es constatar que los gobiernos estatal y municipal no priorizan la creación de valores con sus políticas, sino que abandonan las zonas periféricas y las favelas. Como me recordó mi hija, que trabaja en Barra pero vive en Santa Teresa, sobre el verdadero terror y la parálisis que se vive en Río: «La Zona Sur es otra ciudad y otro estado, no es Río». Necesitamos muchos más ciudadanos cariocas que vean el contraste entre un territorio común amurallado, donde se atiende a los ciudadanos ricos y se promueve la represión y la guerra contra los pobres. Esto no puede considerarse una democracia efectiva.

¿Podría considerarse parte de la política de seguridad pública una
masacre como la ocurrida en Río de Janeiro?

La política de seguridad pública que exige democracia y diversidad como forma de ciudadanía jamás puede basarse en la posibilidad de priorizar la represión y la violencia armada, sino en la prevención de la violencia. Lo ocurrido el martes en Río fue una guerra interna del Estado contra la ciudadanía. Las personas inocentes asesinadas no son simplemente «muertes colaterales» en una zona delictiva. Si se trata de una «zona delictiva», fue la negligencia del Estado la que permitió su formación allí, precisamente en las periferias pobres y excluidas, lejos de la mirada del Estado y, en el caso de Río, de la glamurosa «Zona Sur». Tenemos una ciudad dividida y políticas públicas divididas. Lo sucedido evidencia una actuación estatal desastrosa e incluso criminal. No existen las «balas perdidas», pues siempre son intencionales y dirigidas. Nos enfrentamos a una actuación estatal desastrosa, tanto en su concepción como en su ejecución. Inaceptable en una democracia, que, dicho sea de paso, solo florece desde las bases de la sociedad, desde los territorios que habitamos y donde buscamos vivir, guiada por el principio del cuidado: cuidado para todos y cuidado por la integridad misma de esos territorios. «¡Los barrios marginales son ciudades, no zonas de delincuencia!»

Sé que esperar algo virtuoso en materia de políticas públicas en Río en el futuro inmediato es casi una pérdida de tiempo y conduce a la desesperación. Pero culpar al Gobierno Federal ignora que la Política de Seguridad, tal como ha sido concebida y propuesta, debe someterse al marco institucional existente. Es decir, depende de la aprobación del Congreso, dominado por el execrable “Centrão”, una especie de cáncer implantado en nuestra democracia institucionalizada, con sus virtudes y limitaciones. En el Congreso, no prevalece la búsqueda del bien común. En cambio, predominan los intereses particulares de los grupos de presión y del llamado “Centrão”, más preocupados por las enmiendas parlamentarias para sus bastiones electorales que por la democracia y la búsqueda del bien común y la igualdad de derechos en nuestra diversidad.

En conclusión, afirmo que no tendremos salida si la Seguridad Pública no se concibe y formula sobre la base de la igualdad de derechos. Además, no avanzaremos si nosotros, los diversos ciudadanos activos de este inmenso país, no nos centramos especialmente en esta política pública. Este Brasil nuestro, con sus múltiples exclusiones e incluso sus «guerras

¿Podría considerarse parte de la política de seguridad pública una
masacre como la ocurrida en Río de Janeiro?

internas», depende de nuestra acción, como ciudadanos activos en la esfera pública, que señala el camino hacia cambios profundos, también en materia de Seguridad Pública. ¡No podemos esperar milagros en las políticas públicas! O actuamos, porque somos la base de las políticas, o nada cambiará.

Cándido Grzybowski

Foto tomada de: DW